

PROPIETARIO Y/O POSEEDOR Y/O RESPONSABLE
Y/O ENCARGADO DEL INMUEBLE Y/O DE LAS
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE RADIODIFUSIÓN
CON LOS CUALES SE OPERABA EN LA FRECUENCIA
96.1 MHZ, LOCALIZADOS EN EL DOMICILIO
UBICADO EN: [REDACTED]

[REDACTED] MUNICIPIO DE COMONFORT, EN EL
ESTADO DE GUANAJUATO.

[REDACTED]
Municipio de Comonfort, Estado de Guanajuato.

Ciudad de México, a veinticinco de enero de dos mil diecisiete.- Visto para resolver en definitiva el procedimiento administrativo de imposición de sanción y declaratoria de pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación, relativo al expediente E-IFT.UC.DG-SAN.I.0222/2016, iniciado por el Titular de la Unidad de Cumplimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones (en lo sucesivo el "Instituto" o el "IFT"), mediante acuerdo de catorce de octubre de dos mil dieciséis notificado el dieciocho de octubre siguiente, en contra del PROPIETARIO Y/O POSEEDOR Y/O RESPONSABLE Y/O ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE RADIODIFUSIÓN Y/O [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE PROPIETARIO DEL INMUEBLE DONDE SE DETECTARON LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE LA ESTACIÓN DE RADIODIFUSIÓN, OPERANDO LA FRECUENCIA 96.1 MHZ, localizados en Calle [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], Municipio de Comonfort, Estado de Guanajuato (en adelante el "PRESUNTO RESPONSABLE"), por el probable incumplimiento a lo previsto en el artículo 66 en relación con el 75 y la probable actualización de la hipótesis normativa prevista en el artículo 305, todos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (en lo sucesivo la "LFTyR"). Al respecto, se emite la presente Resolución de conformidad con lo siguiente, y

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante oficio **IFT/225/UC/DGA-VESRE/319/2016** de once de marzo de dos mil dieciséis, la Dirección General Adjunta de Vigilancia del Espectro Radioeléctrico (en adelante "**DGAVER**"), informó a la Dirección General de Verificación que derivado de los trabajos de radiomonitorio y medición de parámetros técnicos al servicio de Radiodifusión en Frecuencia Modulada (en adelante **FM**) en el Estado de Guanajuato, se detectó una señal operando en la frecuencia **96.1 MHz**, la cual transmite música variada y programación esotérica, de la cual al efectuar la consulta en la infraestructura para estaciones de Radiodifusión en FM, no se encontró registro para su operación en dicho Estado, de conformidad con la infraestructura de Estaciones de Radio en **FM** de este Instituto.

Asimismo, la **DGAVER** informó que se realizaron trabajos de localización del transmisor de la frecuencia citada, concluyendo que se ubicó en la azotea de un inmueble particular con domicilio en [REDACTED] **Municipio de Comonfort, Estado de Guanajuato**, en las inmediaciones de las coordenadas [REDACTED] [REDACTED] remitiendo para tal efecto el Informe de Radiomonitorio **IFT/336/2016**, emitido por personal adscrito a dicha área.

SEGUNDO. En atención a lo anterior, el personal de la Dirección General de Verificación (en adelante "**DGV**") se avocó a la búsqueda en la infraestructura de estaciones de Frecuencia Modulada de la página de internet del Instituto¹, con el objeto de constatar si la frecuencia **96.1 MHz**, en el Municipio de Comonfort, Estado de Guanajuato, se encontraba registrada, sin embargo de dicha búsqueda no se advirtió registro alguno.

¹ Visible en: http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/industria/infraestructurafm28-04-15_1.pdf

TERCERO. En ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 43, fracción VI del Estatuto Orgánico del Instituto, la **DGV**, mediante oficio **IFT/225/UC/DG-VER/940/2016** emitió la orden de inspección-verificación **IFT/UC/DGV/194/2016** de veinte de mayo de dos mil dieciséis, al propietario, y/o poseedor, y/o responsable, y/o encargado del inmueble ubicado en [REDACTED], [REDACTED], Municipio de Comonfort, Estado de Guanajuato.

CUARTO. En consecuencia, el veinte de mayo de dos mil dieciséis, los inspectores-verificadores de telecomunicaciones y radiodifusión (en adelante "**LOS VERIFICADORES**"), realizaron la comisión de verificación y levantaron el acta de verificación ordinaria número **IFT/UC/DGV/194/2016**, en el inmueble ubicado en [REDACTED], [REDACTED] Municipio de Comonfort, Estado de Guanajuato, la cual se dio por terminada el mismo día de su inicio.

QUINTO. Dentro del acta de verificación ordinaria número **IFT/UC/DGV/194/2016**, **LOS VERIFICADORES**, hicieron constar que en el inmueble citado, se detectaron equipos de radiodifusión operando la frecuencia **96.1 MHz**. Asimismo, se asentó que la persona que atendió la visita se negó a proporcionar su nombre y a proporcionar identificación alguna que permitiera corroborar su identidad y ante la negativa de designar testigos de asistencia, **LOS VERIFICADORES** nombraron a **Marco Antonio Esquivel Medina** y **Alejo Reyes Ramírez**, quienes aceptaron el cargo conferido.

SEXTO. Una vez cubiertos los requisitos de ley, **LOS VERIFICADORES** acompañados de la persona que atendió la visita en el inmueble señalado y de los testigos de asistencia, procedieron a verificar las instalaciones de la radiodifusora que opera la frecuencia **96.1 MHz**, encontrando que:

"...se trata de un inmueble de [REDACTED]
[REDACTED] con equipos instalados y operando en la frecuencia 96.1 MHz y en la parte superior colocado un mástil con una antena omnidireccional."

Asimismo, solicitaron a la persona que recibió la visita en el inmueble señalado, informara si la estación que transmite en la frecuencia **96.1 MHz**, cuenta con concesión o permiso expedido por el Instituto para hacer uso de esa frecuencia, a lo que **LA VISITADA** manifestó que no sabía a qué se refería.

SÉPTIMO. En razón de que **LA VISITADA** no exhibió el respectivo título de concesión o permiso otorgado por autoridad competente que ampare o legitime la prestación del servicio de radiodifusión a través del uso, aprovechamiento o explotación de la frecuencia **96.1 MHz**, **LOS VERIFICADORES** procedieron al aseguramiento de los equipos encontrados en el inmueble en donde se practicó la visita, destinados a la operación de la estación, quedando como depositario interventor de los mismos, Raúl Leonel Mulhia Arzaluz, conforme a lo siguiente:

Equipo	Marca	Modelo	Número de Serie	Sello de aseguramiento
Transmisor armado	Sin marca	Sin modelo	Sin número de serie	0203-16
Antena omnidireccional	Sin marcar	Sin modelo	Sin número de serie	0204-16

Al finalizar la diligencia respectiva se hizo del conocimiento de **LA VISITADA** que contaba con un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la práctica de la diligencia para presentar las pruebas y defensas que a su interés conviniera, mismo que transcurrió del veinticinco de mayo al ocho de junio de dos mil dieciséis, sin considerar los días veintiocho y veintinueve de mayo y cuatro y cinco de junio del mismo año por haber sido sábados y domingos en términos del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (en adelante "**LFPA**").

Cabe precisar que transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo que antecede, no existe constancia alguna de que el **PRESUNTO RESPONSABLE** o su representación legal hubieran exhibido pruebas y defensas de su parte.

OCTAVO. A efecto de allegarse mayores elementos que permitieran identificar al propietario del inmueble donde se encontró el equipo asegurado, mediante oficios **IFT/225/UC/DG-VER/1341/2016** y **IFT/225/UC/DG-VER/1342/2016**, ambos de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, dirigidos al Registro Público de la Propiedad y a la Dirección del Catastro e Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria, en el Municipio de Comonfort, Estado de Guanajuato, respectivamente, la **DGV** solicitó proporcionaran mediante constancias debidamente certificadas, el nombre de la persona física o moral propietaria y/o poseedora del inmueble ubicado en [REDACTED]

[REDACTED] Municipio de Comonfort, Estado de Guanajuato.

NOVENO. El seis de julio de dos mil dieciséis, se recibió un sobre conteniendo un "*Certificado de Inscripción o no Inscripción*" por parte del Registro Público de la Propiedad del Municipio de Comonfort en el Estado de Guanajuato, donde señala que habiéndose realizado una búsqueda en los archivos correspondientes al Municipio de Comonfort, no se localizó información alguna dentro de sus registros en relación con la información proporcionada, sin embargo informó lo siguiente: "*SE ENCONTRÓ UNA INSCRIPCIÓN BAJO EL FOLIO R09* 1001 QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE: ...FINCA URBANA UBICADA EN LA* [REDACTED]

[REDACTED] siendo el propietario de la finca el C. [REDACTED]

DÉCIMO. El once de julio de dos mil dieciséis, se recibió este Instituto el oficio No. DCIP/262/2016 emitido por la Dirección del Catastro e Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria, en el Municipio de Comonfort, Estado de Guanajuato, mediante el cual informó que se realizó una búsqueda exhaustiva en los libros de esa oficina, no

habiendo encontrado registro alguno sobre el inmueble solicitado, informando también que dentro del sistema comercial con el que ellos operan, no tienen registrado el domicilio de calle [REDACTED]

DÉCIMO PRIMERO. Mediante oficio IFT/225/UC/DG-VER/2068/2016 de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, la DGV remitió al Titular de la Unidad de Cumplimiento un "Dictamen por el cual se propone el inicio de **PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES** y la **DECLARATORIA DE PÉRDIDA DE BIENES, INSTALACIONES Y EQUIPOS EN BENEFICIO DE LA NACIÓN**, en contra del **PRESUNTO RESPONSABLE PROPIETARIO, Y/O POSEEDOR Y/O RESPONSABLE, Y/O ENCARGADO** de **LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS EN BENEFICIO DE LA NACIÓN**, en contra del **PROPIETARIO Y/O POSEEDOR Y/O RESPONSABLE Y/O ENCARGADO** de las instalaciones y equipos de radiodifusión localizados en el inmueble ubicado en: Calle [REDACTED] Municipio de Comonfort, Estado de Guanajuato (lugar en que se detectaron las instalaciones de una estación de radiodifusión, operando la frecuencia **96.1 MHz**), por la presunta infracción del **artículo 66** en relación con el **artículo 75**, y la probable actualización de la hipótesis normativa prevista en el **artículo 305**, todos de la **Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión**, derivado de la visita de inspección y verificación que consta en el Acta de Verificación número **IFT/UC/DGV/194/2016**." (sic)

DÉCIMO SEGUNDO. En virtud de lo anterior, por acuerdo de catorce de octubre de dos mil dieciséis, el Instituto por conducto del Titular de la Unidad de Cumplimiento inició el procedimiento administrativo de imposición de sanción y declaratoria de la pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación, en contra del **PRESUNTO RESPONSABLE**, por presumirse la infracción al artículo 66 en relación con el 75 y la actualización de la hipótesis normativa prevista en el artículo 305, todos de la **LFTyR**, ya que de la propuesta de la **DGV**, se cuentan con elementos suficientes para acreditar la prestación del servicio de radiodifusión a través de la

operación, uso y aprovechamiento de una vía general de comunicación (espectro radioeléctrico) consistente en la frecuencia **96.1MHz**, por parte del **PRESUNTO RESPONSABLE** sin contar con la concesión, permiso o autorización correspondiente de conformidad con lo establecido en la **LFTyR**.

DÉCIMO TERCERO. Previamente citatorio que fue dejado el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, el dieciocho siguiente se notificó por instructivo al **PRESUNTO RESPONSABLE**, el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de imposición de sanción, en el que se le concedió un plazo de quince días, para que en uso del beneficio de la garantía de audiencia consagrada en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante "**CPEUM**") y 72 de la **LFA** de aplicación supletoria en términos del artículo 6, fracción IV de la **LFTyR**, expusiera lo que a su derecho conviniera y, en su caso aportara las pruebas con que contara.

El término concedido al **PRESUNTO RESPONSABLE** para presentar sus manifestaciones y pruebas, transcurrió del diecinueve de octubre al ocho de noviembre de dos mil dieciséis, sin contar los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de octubre; así como cinco y seis de noviembre todos de dos mil dieciséis por haber sido sábados y domingos respectivamente, en términos del artículo 28 de la **LFA**.

DÉCIMO CUARTO. De las constancias que forman el presente expediente se observó que el **PRESUNTO RESPONSABLE** no presentó escrito de manifestaciones y pruebas, por lo que mediante acuerdo de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, notificado por publicación de lista diaria de notificaciones en la página de este **Instituto** el mismo día, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo en que se actúa y se tuvo por precluido su derecho para presentar pruebas y defensas de su parte.

En consecuencia, por así corresponder al estado procesal que guardaba el presente asunto, con fundamento en el artículo 56 de la LFPA, se pusieron a su disposición los autos del presente expediente para que dentro del término de diez días hábiles formulara alegatos, en el entendido que transcurrido dicho plazo, con alegatos o sin ellos, se emitiría la Resolución que conforme a derecho correspondiera.

DÉCIMO QUINTO. Mediante oficio IFT/225/UC/DG-SAN/0588/2016 de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, se solicitó a la Administración de Operación de Declaraciones del Servicio de Administración Tributaria, informara si obraba en sus registros la declaración anual del **PRESUNTO RESPONSABLE** correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil quince.

En respuesta al oficio anterior, mediante el diverso 400 01 05 00 00-2016-6034 de dieciséis de diciembre dos mil dieciséis, la Administración de Operación de Declaraciones del Servicio de Administración Tributaria, informó que derivado de una búsqueda en sus archivos, no se localizó dato alguno relativo a la declaración anual solicitada a nombre de [REDACTED].

DÉCIMO SEXTO. El término concedido al **PRESUNTO RESPONSABLE** para presentar sus alegatos transcurrió del quince al veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, lo anterior sin considerar los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de noviembre de dos mil dieciséis, por haber sido sábados y domingos en términos del artículo 28 de la LFPA, así como el veintiuno de noviembre del mismo año al haber sido día inhábil en términos del *“ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprueba su calendario anual de sesiones ordinarias y el calendario anual de labores para el año 2016 y principios de 2017”*².

² Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2015.

Sin embargo de las constancias que forman el presente expediente se advierte que no presentó sus alegatos, por lo que mediante acuerdo de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, publicado en la lista diaria de notificaciones en la página del Instituto el seis de diciembre siguiente, se tuvo por precluido su derecho para ello y por lo tanto fue remitido el presente expediente a este órgano colegiado para la emisión de la Resolución que conforme a derecho resulte procedente.

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA.

El Pleno del Instituto es competente para conocer y resolver el presente procedimiento administrativo de imposición de sanción y declarar la pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación, con fundamento en los artículos 14, 16 y 28, párrafos, décimo quinto, décimo sexto y vigésimo, fracción I de la CPEUM; 1, 2, 6, fracciones II, IV y VII, 7, 15, fracción XXX, 17, penúltimo y último párrafos, 66, 75, 297, primer párrafo, 298, inciso E), fracción I y 305 de la LFTyR; 3, 8, 9, 12, 13, 14, 16 fracción X, 28, 49, 50, 59, 70, fracciones II y VI, 72, 73, 74 y 75 de la LFPA; y 1, 4, fracción I y 6, fracción XVII, del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones (en adelante "ESTATUTO").

SEGUNDO. CONSIDERACIÓN PREVIA

La Soberanía del Estado sobre el espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, que es el medio en que se propagan las señales de audio o de audio y video asociados mediante la instalación, funcionamiento y operación de estaciones de radio y televisión, se ejerce observando lo dispuesto en los artículos 27 párrafos cuarto y sexto y 28 de la CPEUM, los cuales prevén que el dominio de la Nación sobre el espectro radioeléctrico es inalienable e imprescriptible y que la explotación, uso o aprovechamiento de dicho recurso por los particulares o por

sociedades debidamente constituidas conforme a las leyes mexicanas, sólo puede realizarse mediante títulos de concesión otorgados por el IFT, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezca la normatividad aplicable en la materia.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 28, párrafos décimo quinto y décimo sexto de la CPEUM, el IFT es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, para lo cual tiene a su cargo, entre otros, la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Asimismo, es también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.

Conforme a lo anterior, el IFT es el encargado de vigilar la debida observancia a lo dispuesto en las concesiones y autorizaciones que se otorguen para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, dedicadas al servicio público de radiodifusión como vehículo de información y de expresión, a fin de asegurar que se realice de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Bajo esas consideraciones, el ejercicio de las facultades de supervisión y verificación por parte del IFT traen aparejada la relativa a imponer sanciones por el incumplimiento a lo establecido en las leyes correspondientes o en los respectivos títulos de concesión, asignaciones o permisos, con la finalidad de inhibir aquellas conductas que atenten contra los objetivos de la normatividad en la materia.

Ahora bien, para determinar la procedencia en la imposición de una sanción, la LFTyR aplicable en el caso en concreto, no sólo establece obligaciones para los concesionarios y permisionarios y en general para cualquier persona, sino también

señala supuestos de incumplimiento específicos y las consecuencias jurídicas a las que se harán acreedores en casos de infringir la normatividad en la materia.

Es decir, al pretender imponer una sanción, esta autoridad debe analizar, minuciosamente, la conducta que se le imputa al **PRESUNTO RESPONSABLE** y determinar si la misma es susceptible de ser sancionada en términos del precepto legal o normativo que se considera violado.

En este orden de ideas, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el desarrollo jurisprudencial de los principios del derecho penal en el campo administrativo sancionador irá formando los principios propios para este campo del *ius puniendi* del Estado, sin embargo, en tanto esto sucede, es válido considerar de manera prudente las técnicas garantistas del derecho penal, como lo es el principio de inaplicabilidad de la analogía en materia penal o tipicidad.

En ese sentido, el derecho administrativo sancionador y el derecho penal al ser manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de éstos, debe cuidarse en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador, la correcta observancia del aducido principio de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida por el poder legislativo, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón.

Así, en la especie se considera que la conducta desplegada por el presunto infractor vulnera el contenido del artículo 66 de la **LFTyR**, que al efecto establece que se requiere de concesión única otorgada por el **IFT** para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión.

Desde luego, el mencionado precepto dispone lo siguiente:

"Artículo 66. Se requerirá concesión única para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión."

Lo anterior, en relación con el artículo 75 de la **LFTyR**, el cual dispone que corresponde al **Instituto** el otorgamiento de concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico.

Ahora bien, para efectos de cumplir con el citado principio de tipicidad, resulta importante hacer notar que la conducta antes referida, misma que resulta contraria a la ley, es susceptible de ser sancionada en términos de la fracción I del inciso E) del artículo 298 de la **LFTyR**, mismo que establece que la sanción que en su caso procede imponer a quien preste servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin contar con concesión o autorización, consiste en una multa por el equivalente del 6.01% hasta el 10% de los ingresos acumulables de la persona infractora.

En efecto, el artículo 298, inciso E), fracción I de la **LFTyR**, establece expresamente lo siguiente:

"Artículo 298. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley y a las disposiciones que deriven de ella, se sancionarán por el Instituto de conformidad con lo siguiente:

(...)

E). Con multa por el equivalente de 6.01% hasta 10% de los ingresos de la persona infractora que:

I. Preste servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin contar con concesión o autorización...

Asimismo, la comisión de la conducta en análisis, actualiza la primera de las hipótesis normativas previstas en el artículo 305 de la LFTyR, misma que establece como consecuencia, la pérdida en beneficio de la Nación, de los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones. En efecto dicho precepto legal expresamente establece:

"Artículo 305. Las personas que presten servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión, sin contar con concesión o autorización, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación, perderán en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones."

De lo anterior podemos concluir que el principio de tipicidad sólo se cumple cuando en una norma consta una predeterminación tanto de la infracción como de la sanción, es decir que la ley describa un supuesto de hecho determinado que permita predecir las conductas infractoras y las sanciones correspondientes para tal actualización de hechos, situación que se hace patente en el presente asunto.

Por otra parte, resulta importante mencionar que para el ejercicio de la facultad sancionadora, en el caso de incumplimiento de las disposiciones legales en materia de radiodifusión, el artículo 297 primer párrafo de la LFTyR establece que para la imposición de las sanciones previstas en dicho cuerpo normativo, se estará a lo previsto por la LFPA, la cual prevé dentro de su Título Cuarto, Capítulo Único, el procedimiento para la imposición de sanciones.

En efecto, los artículos 70 y 72 de la LFPA, establecen que para la imposición de una sanción, se deben cubrir dos premisas: i) que la sanción se encuentre prevista en la ley y ii) que previamente a la imposición de la misma, la autoridad competente notifique al presunto infractor el inicio del procedimiento respectivo, otorgando al efecto un plazo de quince días para que el presunto infractor exponga lo que a su derecho convenga, y en su caso aporte las pruebas con que cuente.

Así las cosas, al iniciarse el procedimiento administrativo de imposición de sanción en contra del **PRESUNTO RESPONSABLE**, se presumió el incumplimiento de lo establecido en el artículo 66 en relación con el 75 de la **LFTyR** ya que no contaba con la concesión correspondiente para la prestación del servicio público de radiodifusión, en concreto para operar la frecuencia **96.1 MHz**, conducta que de acreditarse actualizaría la hipótesis normativa prevista en el artículo 305 del citado ordenamiento.

En este sentido, a través de la notificación del acuerdo de inicio de procedimiento, la Unidad de Cumplimiento dio a conocer al **PRESUNTO RESPONSABLE** la conducta que, supuestamente, viola el artículo 66 en relación con el 75 de la **LFTyR**, así como las sanciones previstas en los artículos 298, inciso E), fracción I y 305 de dicha ley por la comisión de la misma.

Por ello, se le otorgó un término de quince días hábiles para que en uso de su garantía de audiencia rindiera las pruebas y manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera, de conformidad con el artículo 14 de la **CPEUM** en relación con el artículo 72 de la **LFPA**.

Concluido el periodo de pruebas, de acuerdo con lo que dispone el artículo 56 de la **LFPA**, la Unidad de Cumplimiento puso las actuaciones a disposición del interesado, para que formulara sus alegatos.

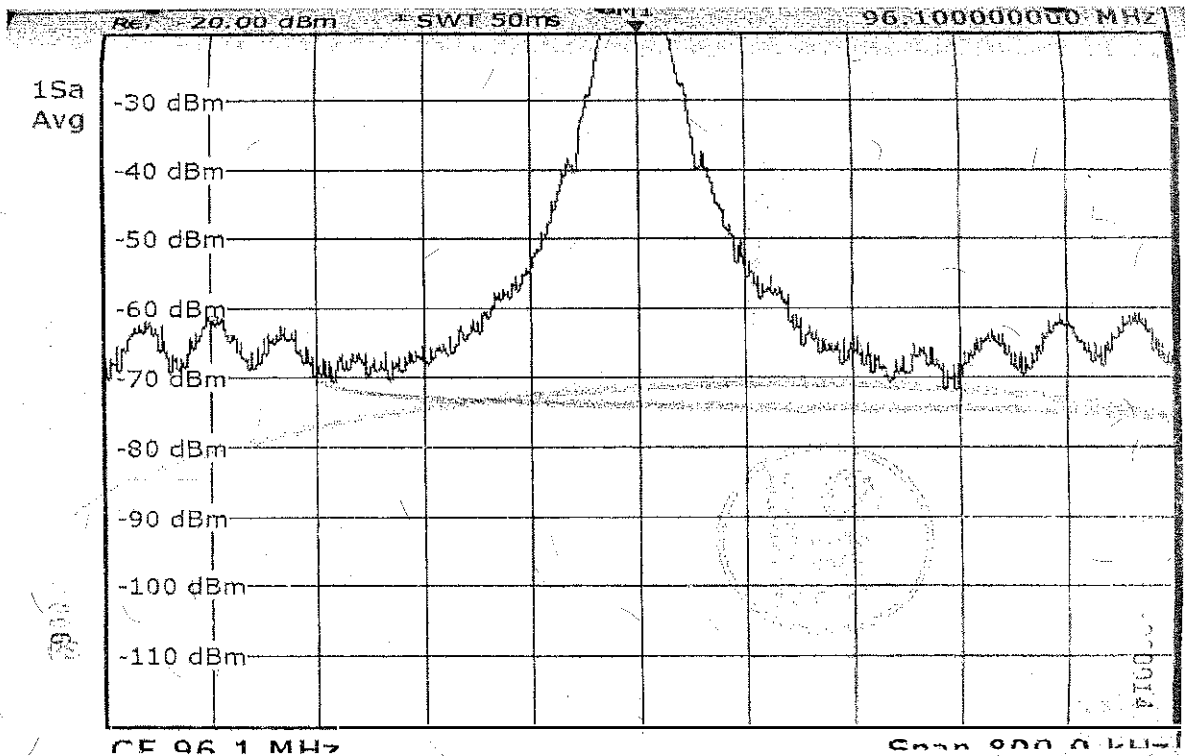
Una vez desahogado el periodo probatorio y vencido el plazo para formular alegatos, la Unidad de Cumplimiento remitió el expediente de mérito en estado de resolución al Pleno de este **IFT**, quien se encuentra facultado para dictar la resolución que en derecho corresponda.

Bajo ese contexto, el procedimiento administrativo de imposición de sanciones que se sustancia, se realizó conforme a los términos y principios procesales que establece la LPA y los artículos 14 y 16 de la CPEUM consistentes en: i) otorgar garantía de audiencia al presunto infractor; ii) desahogar pruebas; iii) recibir alegatos, y iv) emitir la resolución que en derecho corresponda. Lo anterior, con independencia de que el **PRESUNTO RESPONSABLE** no ofreció pruebas ni presentó alegatos a su favor.

En las relatadas condiciones, al tramitarse el procedimiento administrativo de imposición de sanción bajo las anteriores premisas, debe tenerse por satisfecho el cumplimiento de lo dispuesto en la CPEUM, las leyes ordinarias y los criterios judiciales que informan cual debe ser el actuar de la autoridad para resolver el presente caso.

TERCERO. HECHOS MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE IMPOSICIÓN DE SANCIÓN Y DECLARATORIA DE PÉRDIDA DE BIENES, INSTALACIONES Y EQUIPOS EN BENEFICIO DE LA NACIÓN.

Con la finalidad de dar cumplimiento a la orden de inspección-verificación IFT/225/UC/DGV/194/2016 de veinte de mayo de dos mil dieciséis, dirigida al propietario y/o poseedor y/o responsable y/o encargado del inmueble ubicado en Calle [REDACTED], [REDACTED] Municipio de Comonfort, Estado de Guanajuato, el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, **LOS VERIFICADORES** se constituyeron en dicho lugar, donde practicaron un recorrido visual a efecto determinar la ubicación del domicilio donde se transmitía en la frecuencia **96.1 MHz**, antes de llevar a cabo la visita de verificación



En consecuencia, en esa misma fecha **LOS VERIFICADORES** se constituyeron en el domicilio ubicado en Calle [REDACTED] Municipio de Comonfort, Estado de Guanajuato (lugar de origen de la señal) y levantaron el **ACTA DE VERIFICACIÓN ORDINARIA** número **IFT/UC/DGV/194/2016** dándose por terminada dicha diligencia el mismo día de su inicio.

En dicho domicilio se encontraba una persona quien se negó a proporcionar su nombre e identificarse, cuya media filiación es "sexo [REDACTED]

[REDACTED] metros de estatura...". Posteriormente, **LOS VERIFICADORES** le hicieron saber el objeto de la visita haciéndole entrega del original del oficio **IFT/225/UC/DG-VER/940/2016** que contiene la orden de inspección-verificación ordinaria **IFT/UC/DGV/194/2016** de veinte de mayo de dos mil dieciséis. No obstante, se negó a firmar una copia de dicho oficio como constancia de acuse de recibo,

manifestando la persona que atendió la diligencia que "... pues denme ese escrito pero no les firmo como ustedes me lo piden".

Asimismo, toda vez que la persona que atendió la diligencia no nombró testigos de asistencia, **LOS VERIFICADORES** nombraron a los **CC. MARCO ANTONIO ESQUIVEL MEDINA Y ALEJO REYES RAMIREZ**, quienes aceptaron el cargo.

Una vez cubiertos los requisitos de ley, **LOS VERIFICADORES** acompañados de la persona que atendió la visita y de los testigos de asistencia, procedieron a verificar las instalaciones del inmueble, encontrando instalados y en operación: un transmisor, sin Marca ni Modelo y antena Omnidireccional sin marca ni modelo, en el interior de un cuarto ubicado en segundo nivel, los cuales operaban en la frecuencia **96.1 MHz**.

Posteriormente, **LOS VERIFICADORES** solicitaron a la persona que atendió la visita, manifestara bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

- Qué persona es el propietario de la estación de radiodifusión que transmite desde este inmueble, a lo que la persona que recibió la visita respondió: "solo sé que [REDACTED] nos rentó para poner una antena y medir el clima, le rentamos el espacio porque necesitamos el dinero para completar para poder comer".
- Si sabe que desde ese inmueble se está operando una estación de radiodifusión la cual opera en la banda de frecuencia modulada en **96.1 MHz**, a lo que la persona que recibió la visita contesto que "no".

Por lo anterior, se le solicitó a dicha persona informara si contaba con concesión o permiso otorgado por la autoridad para hacer uso de una frecuencia del espectro radioeléctrico, a lo que la persona que atendió la diligencia dijo "... no sé a qué se

refiere...”, motivo por el cual **LOS VERIFICADORES** requirieron a la persona que atendió la visita que apagara y desconectara los equipos con los cuales transmitía en la frecuencia antes referida, a lo que la persona que atendió la diligencia manifestó: *“yo no puedo hacer nada”*.

En razón de que dicha persona no exhibió el respectivo título de concesión o permiso otorgado por autoridad competente que amparara o legitimara la prestación del servicio de radiodifusión a través del uso, aprovechamiento o explotación de la frecuencia **96.1MHz**, **LOS VERIFICADORES** procedieron al aseguramiento del equipo encontrado en el inmueble en donde se practicó la visita, quedando como interventor especial (depositario) del mismo, **RAÚL LEONEL MULHIA ARZALUZ**, Subdirector de Supervisión de este Instituto Federal de Telecomunicaciones, quien aceptó y protestó el cargo, situación que se hizo constar en el **ACTA DE VERIFICACIÓN ORDINARIA**, conforme a lo siguiente:

Equipo	Marca	Modelo	Número de Serie	Sello de aseguramiento
Transmisor armado	Sin marca	Sin modelo	Sin número de serie	0203-16
Antena omnidireccional	Sin marcar	Sin modelo	Sin número de serie	0204-16

Previamente a la conclusión de la diligencia, en términos del artículo 68 de la **LFPA**, **LOS VERIFICADORES** informaron a **LA VISITADA**, que le asistía el derecho de manifestar lo que a sus intereses conviniera, respecto de los hechos asentados en el acta de verificación, a lo que dicha persona manifestó: *“...pues sólo sé que le rentamos a [REDACTED] y que nos dijo que era para medir el clima y que nosotros no tenemos nada que ver, somos gente pobre con necesidades para comer, la gente que puso la antena abusa porque nos ve a uno es ignorante y uno desconoce de esas cosas...”* (sic).

Dado lo anterior, **LOS VERIFICADORES** con fundamento en el artículo 524 de la Ley de Vías Generales de Comunicación (en adelante **“LVGC”**) notificaron a la persona que recibió la diligencia, que tenía un plazo de diez días hábiles para que

en ejercicio de su garantía de audiencia presentara por escrito las pruebas y defensas que estimara procedentes ante el Instituto.

El término de diez días hábiles otorgado a la visitada para presentar pruebas y defensas en relación a los hechos contenidos en el **ACTA DE VERIFICACIÓN ORDINARIA** transcurrió del veinticinco de mayo al ocho de junio de dos mil dieciséis, sin considerar los días veintiocho y veintinueve de mayo; cuatro y cinco junio de esa anualidad por haber sido sábados y domingos respectivamente, en términos del artículo 28 de la **LFPA**, término que feneció sin que se presentara escrito alguno.

Derivado de lo anterior y una vez analizadas las constancias respectivas, la **DGV** estimó que con su conducta el **PRESUNTO RESPONSABLE** presumiblemente contravino lo dispuesto por el artículo 66 en relación con el 75 y actualizó la hipótesis normativa prevista en el artículo 305, todos de la **LFTyR**. Lo anterior de conformidad con lo siguiente:

A) Artículo 66 en relación con el 75 de la LFTyR.

El artículo 66 de la **LFTyR**, establece que: "*Se requerirá concesión única para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión.*"

Por su parte el artículo 75 de la **LFTyR**, dispone que "*Las concesiones para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado y para la ocupación y explotación de recursos orbitales, se otorgarán por el Instituto por un plazo de hasta veinte años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI de este Título.*"

En este sentido, dicha concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, es el título habilitante que otorga a su titular la legitimación para prestar servicios de radiodifusión. Sin embargo, de las

manifestaciones expresas realizadas tras la diligencia y del informe de radiomonitorio, se demuestra fehacientemente que el **PRESUNTO RESPONSABLE**, al momento de la diligencia, usaba la frecuencia **96.1 MHz** de la banda de Frecuencia Modulada en Calle [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Municipio de Comonfort, Estado de **Guanajuato**, sin contar con el documento idóneo que ampare la prestación de dicho servicio.

Asimismo, con motivo del monitoreo realizado en dicho domicilio, se constató que el uso de la frecuencia **96.1 MHz** no estaba registrada a concesionario o autorizado alguno para esa entidad, dentro de la infraestructura de Estaciones de Radio **FM** publicada en la página web del **Instituto**.

Ahora bien, de los hechos que se hicieron constar en el **ACTA DE VERIFICACIÓN ORDINARIA** durante el desarrollo de la visita de inspección-verificación, se desprende lo siguiente:

- a) El uso de la frecuencia **96.1 MHz**, mediante un transmisor, sin marca ni modelo y antena omnidireccional, en el interior de un cuarto ubicado en segundo nivel, los cuales operaban en la frecuencia **96.1 MHz**, con lo que se acredita el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico, correspondiente a la banda de **FM**, sin contar con concesión o permiso.
- b) Del monitoreo realizado, se constata que el **PRESUNTO RESPONSABLE** se encontraba prestando servicios de radiodifusión mediante el uso de la frecuencia **96.1 MHz** en la banda de **FM**.
- c) En cuanto al cuestionamiento de **LOS VERIFICADORES**, respecto a que si contaba con concesión o permiso, para el uso de la frecuencia **96.1 MHz** en la banda de **FM**, la persona que atendió la diligencia manifestó: "**No sé a qué se refiere**".

Por tanto, se acreditó la infracción al artículo 66 en relación con el 75, de la LFTyR, toda vez que al momento de llevarse a cabo la visita de inspección-verificación, se detectó que en el inmueble visitado, se prestaba el servicio de radiodifusión a través del uso de la frecuencia **96.1MHz** de **FM** sin contar con la respectiva concesión, permiso o autorización emitida por autoridad competente.

B) Artículo 305 de la LFTyR.

En lo que respecta esta disposición, el artículo 305 de la LFTyR, menciona lo siguiente:

"Artículo 305. Las personas que presten servicios de radiodifusión, sin contar con concesión o autorización, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación, perderán en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones".

En efecto, el espectro radioeléctrico constituye un bien de uso común que está sujeto al régimen de dominio público de la Federación, pudiendo hacer uso de él todos los habitantes de la República Mexicana, con las restricciones establecidas en las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas aplicables, pero para su aprovechamiento se requiere concesión otorgada conforme a las condiciones y requisitos legalmente establecidos, los que no crean derechos reales, pues sólo otorgan frente a la administración y sin perjuicio de terceros, el derecho al uso, aprovechamiento o explotación conforme a las leyes y al título correspondiente.

Al respecto, durante la diligencia de inspección-verificación, **LOS VERIFICADORES**, realizaron el monitoreo de frecuencias en FM y corroboraron que la frecuencia **96.1 MHz** estaba siendo utilizada.

Por tanto, se corroboró que el **PRESUNTO RESPONSABLE** se encontraba prestando el servicio de radiodifusión sin contar con el título de concesión, permiso o autorización respectivos. En consecuencia, se actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 305 de la LFTyR.

Ahora bien, en el dictamen remitido por la **DGV** se consideró que el **PRESUNTO RESPONSABLE** prestaba el servicio público de radiodifusión a través del uso y aprovechamiento de la banda de frecuencia **96.1MHz**, sin contar con la concesión o permiso otorgado por la autoridad competente y en consecuencia el Titular de la Unidad de Cumplimiento inició el procedimiento de imposición de sanción respectivo, mismo que se procede a resolver por éste Órgano Colegiado.

Lo anterior considerando que de conformidad con los artículos 15, fracción XXX de la LFTyR y 41, en relación con el 44 fracción I, y 6, fracción XVII del **ESTATUTO**, el Titular de la Unidad de Cumplimiento tiene facultad para sustanciar procedimientos administrativos sancionatorios y el Pleno del Instituto se encuentra facultado para imponer las sanciones respectivas y declarar la pérdida de los bienes, instalaciones y equipos a favor de la Nación, por el incumplimiento e infracción a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

CUARTO. MANIFESTACIONES Y PRUEBAS.

Mediante oficio **IFT/225/UC/DG-VER/2068/2016** de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, la **DGV** remitió al Titular de la Unidad de Cumplimiento un *"Dictamen por el cual se propone el inicio de **PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES** y la **DECLARATORIA DE PÉRDIDA DE BIENES, INSTALACIONES Y EQUIPOS EN BENEFICIO DE LA NACIÓN**, en contra del **PRESUNTO RESPONSABLE PROPIETARIO, Y/O POSEEDOR Y/O RESONSABLE, Y/O ENCARGADO de LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS EN BENEFICIO DE LA NACIÓN**, en contra del*

PROPIETARIO Y/O POSEEDOR Y/O RESPONSABLE Y/O ENCARGADO de las instalaciones y quipos de radiodifusión localizados en el inmueble ubicado en:

Calle [REDACTED]

Municipio de Comonfort, Estado de Guanajuato (lugar en que se detectaron las instalaciones de una estación de radiodifusión, operando la frecuencia 96.1 MHz), por la presunta infracción del artículo 66 en relación con el artículo 75, y la probable actualización de la hipótesis normativa prevista en el artículo 305, todos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, derivado de la visita de inspección y verificación que consta en el Acta de Verificación número IFT/UC/DGV/194/2016."

En consecuencia, mediante acuerdo de catorce de octubre de dos mil dieciséis el Titular de la Unidad de Cumplimiento inició el procedimiento administrativo de imposición de sanción y de declaratoria de pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación, en el que se le otorgó al **PRESUNTO RESPONSABLE** un término de quince días hábiles para que manifestara lo que a su derecho conviniera y, en su caso, aportara las pruebas con que contara con relación con los presuntos incumplimientos que se le imputan.

Dicho acuerdo fue notificado el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, por lo que el plazo de quince días hábiles transcurrió del diecinueve de octubre al ocho de noviembre de dos mil dieciséis.

Lo anterior, sin considerar los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de octubre; así como cinco y seis de noviembre de dos mil dieciséis por haber sido sábados y domingos respectivamente, en términos del artículo 28 de la LFPA.

Ahora bien, de conformidad con el acuerdo de catorce de octubre de dos mil dieciséis, además de dirigir el presente procedimiento administrativo de imposición de sanción en contra del propietario y/o poseedor y/o responsable y/o encargado

de las instalaciones y equipos de radiodifusión operando la frecuencia 106.1 MHz, se dirigió el mismo en contra de [REDACTED], en su carácter de propietario del citado inmueble, por lo que es importante señalar los motivos que apuntaron a su señalamiento.

Mediante oficios IFT/225/UC/DG-VER/1341/2016 y IFT/225/UC/DG-VER/1342/2016, ambos de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, dirigidos al Registro Público de la Propiedad y a la Dirección del Catastro e Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria, en el Municipio de Comonfort, Estado de Guanajuato, respectivamente, la DGV solicitó proporcionaran mediante constancias debidamente certificadas, el nombre de la persona física o moral propietaria y/o poseedora del inmueble donde se llevó a cabo la visita de verificación.

A ese respecto, el seis de julio de dos mil dieciséis, se recibió un sobre conteniendo un "*Certificado de Inscripción o no Inscripción*" por parte del Registro Público de la Propiedad del Municipio de Comonfort en el Estado de Guanajuato, donde señala que habiéndose realizado una búsqueda en los archivos correspondientes al Municipio de Comonfort, no se localizó información alguna dentro de sus registros en relación con la información proporcionada, sin embargo informó lo siguiente:

*"SE ENCONTRÓ UNA INSCRIPCIÓN BAJO EL FOLIO R09*1001 QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE: ...FINCA URBANA UBICADA EN LA CALLE [REDACTED]*

[REDACTED] siendo el propietario de la finca el C. [REDACTED] por lo que dicha circunstancia otorgó el indicio para advertir que dicha persona era el poseedor del inmueble en el que se ubicaron los equipos ocupados para la comisión de la conducta.

Sin embargo, de las constancias que obran en el presente expediente se advierte que no compareció persona alguna al presente procedimiento administrativo de imposición de sanción.

Ahora bien, en aras de cumplir con los principios de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 de la **CPEUM**, así como con el principio de exhaustividad en el dictado de las resoluciones administrativas, de conformidad con los artículos 13 y 16, fracción X, de la **LFA**, esta autoridad procede a estudiar y analizar en esta parte de la resolución los argumentos que, en su caso, hubieran sido presentados por el **PRESUNTO INFRACTOR**, aclarando que el procedimiento administrativo sancionador, ha sido definido por el Pleno de la **SCJN** como *"el conjunto de actos o formalidades concatenados entre sí en forma de juicio por autoridad competente, con el objeto de conocer irregularidades o faltas ya sean de servidores públicos o particulares, cuya finalidad, en todo caso, sea imponer alguna sanción."*³

De la definición señalada por nuestro Máximo Tribunal se puede advertir que el objeto del procedimiento administrativo sancionador es el de conocer irregularidades o faltas, por lo que se infiere que la *litis* del mismo se sujeta únicamente a acreditar o desvirtuar la comisión de la conducta sancionable, lo cual se fortalece con la imposibilidad de impugnar actos emitidos durante el procedimiento.

Por tanto, el análisis de los mismos debe en todo caso estar encaminado a desvirtuar las imputaciones realizadas por la autoridad, relacionadas con la comisión de las conductas presuntamente sancionables; como lo es la probable infracción a lo dispuesto en los artículos 66 en relación con el 75 y la presunta actualización de la hipótesis normativa prevista en el artículo 305, todos de la **LFTyR**.

³ Párrafo 45; Engrose versión pública. Contradicción de Tesis 200/2013 del índice del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelto en sesión del 28 de enero de 2014, consultable en <http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTemática/PaginasPub/TematicaPub.aspx>

No obstante lo anterior, de acuerdo a lo señalado en los Resultandos **DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO** de la presente Resolución y toda vez que el **PRESUNTO RESPONSABLE** omitió presentar pruebas y defensas dentro del plazo establecido para ello, por proveído de catorce de noviembre del presente año, notificado por publicación de lista diaria de notificaciones en la página de este **IFT** el mismo día, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de catorce de octubre de dos mil dieciséis, por lo que se le tuvo por precluido su derecho para presentar pruebas y defensas de su parte. Lo anterior, con fundamento en los artículos 72 de la **LFPA** y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles (en adelante "**CFPC**"), de aplicación supletoria en términos de los artículos 6, fracciones IV y VII de la **LFTyR** y 2 de la **LFPA**.

Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, en Julio de 2013, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CCV/2013 (100.), Página: 565 cuyo Rubro y texto son del tenor siguiente:

PRECLUSIÓN DE UN DERECHO PROCESAL. NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE JUSTICIA PRONTA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La preclusión es una sanción que da seguridad e irreversibilidad al desarrollo del proceso, pues consiste en la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, y por la cual las distintas etapas del procedimiento adquieren firmeza y se da sustento a las fases subsecuentes, lo cual no sólo permite que el juicio se desarrolle ordenadamente, sino que establece un límite a la posibilidad de discusión, lo cual coadyuva a que la controversia se solucione en el menor tiempo posible; de ahí que dicha institución no contraviene el principio de justicia pronta que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que al efecto establezcan las leyes.

Época: Décima Época, Registro: 2004055, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CCV/2013 (10a.), Página: 565.

QUINTO. ALEGATOS.

Mediante acuerdo de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, notificado por publicación de lista diaria de notificaciones en la página de este IFT el mismo día, se concedió al **PRESUNTO RESPONSABLE** un plazo de diez días hábiles para formular alegatos, el cual corrió del quince al veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, sin contar los días diecinueve, veinte, veintiuno, veintiséis y veintisiete de noviembre de dos mil dieciséis por haber sido sábados, domingos y día inhábil, en términos del artículo 28 de la **LFPA** y del *"ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprueba su calendario anual de sesiones ordinarias y el calendario anual de labores para el año 2016 y principios de 2017"*.

De las constancias que forman parte del presente expediente se advierte que el **PRESUNTO RESPONSABLE** no presentó escrito de alegatos ante éste IFT.

En virtud de lo anterior, de acuerdo a lo señalado en el Resultando **DÉCIMO SEXTO** de la presente Resolución, por proveído de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, publicado en la lista diaria de notificaciones en la página del Instituto el seis de diciembre siguiente, se tuvo por perdido el derecho del **PRESUNTO RESPONSABLE** para formular alegatos de su parte con fundamento en los artículos 72 de la **LFPA** y 288 del **CFPC**.

Por lo anterior, al no existir análisis pendiente por realizar se procede a emitir la presente resolución atendiendo a los elementos que causan plenitud convictiva en esta autoridad, cumpliendo los principios procesales que rigen todo procedimiento.

Sirve de aplicación por analogía la siguiente Jurisprudencia que a su letra señala:

"DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza.

Época: Décima Época, Registro: 2005716, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 11/2014 (10a.), Página: 396."

SEXTO. ANÁLISIS DE LA CONDUCTA Y CONSECUENCIAS JURÍDICAS.

En el presente asunto se considera que existen elementos de convicción suficientes que acreditan que el **PRESUNTO RESPONSABLE** estaba prestando servicios de radiodifusión, sin contar con concesión que lo habilitara para esos fines.

Se afirma lo anterior, en virtud de que del análisis de la conducta desplegada en relación con lo establecido en los preceptos legales que se estimaron trasgredidos claramente se puede advertir que se surten todos los supuestos previstos para su actualización.

En tales consideraciones, debe tomarse en cuenta que:

- 1) Se confirmó el uso de la frecuencia **96.1 MHz** en el inmueble ubicado en Calle [REDACTED] Municipio de Comonfort, Estado de Guanajuato, donde se detectaron las instalaciones de la estación de radiodifusión que operaba dicha frecuencia, con el equipo consistente en: un transmisor, sin marca ni modelo y antena omnidireccional sin marca ni modelo, con lo que se acredita el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico, correspondiente a la banda de **FM**, sin contar con concesión o permiso.
- 2) Se detectó la prestación del servicio público de radiodifusión del cual no se acreditó tener concesión o permiso expedido por autoridad competente que amparara o legitimara la prestación de dicho servicio.

En ese sentido, este Pleno considera que existen elementos de convicción suficientes que acreditan que el **PRESUNTO RESPONSABLE** efectivamente prestaba el servicio público de radiodifusión de forma ilegal, en franca violación del artículo 66 en relación con el 75, ambos de la **LFTyR**.

Así, el presente procedimiento administrativo de imposición de sanción y declaratoria para resolver sobre la pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación instaurado en contra del **PRESUNTO RESPONSABLE**, se inició por el presunto incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 66 en relación con el 75 y actualización de la hipótesis prevista en el artículo 305, todos de la **LFTyR**, mismos que establecen:

"Artículo 66. Se requerirá concesión única para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión."

"Artículo 75. Las concesiones para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado y para la ocupación y explotación de recursos orbitales, se otorgarán por el Instituto por un plazo de hasta veinte años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI de este Título.

"Artículo 305. Las personas que presten servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión, sin contar con la concesión o autorización, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación, perderán en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones."

Del análisis de los preceptos transcritos se desprende que la conducta sancionada es la prestación de servicios de radiodifusión sin contar con concesión o autorización por parte del Instituto, por lo que con el fin de cumplir a cabalidad con el principio de tipicidad se debe analizar si la conducta desplegada se adecua a lo señalado por la norma.

En ese sentido, con el fin de establecer lo que debe entenderse por la prestación de un servicio de radiodifusión, resulta importante tener en consideración lo señalado por las fracciones LIV y LXV del artículo 3 de la **LFTyR**, mismas que expresamente señalan lo siguiente:

"Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por

*LIV. **Radiodifusión:** Propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio o de audio y video asociado, haciendo uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, incluidas las asociadas a recursos orbitales, atribuidas por el Instituto a tal servicio, con el que la población puede recibir de manera directa y gratuita las señales de su emisor utilizando los dispositivos idóneos para ello;*

*LXV. **Servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión:** Servicios de interés general que prestan los concesionarios al público en general con fines comerciales, públicos o sociales de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y la Ley Federal de Competencia Económica;*

De lo señalado por la **LFTyR** se desprenden los elementos que componen el concepto de radiodifusión, mismos que deben ser analizados a la luz de la conducta desplegada para sustentar la determinación de incumplimiento.

En ese sentido las premisas del concepto de radiodifusión son las siguientes:

1. La propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio o de audio y video asociado.
2. El uso, aprovechamiento o explotación de las bandds de frecuencia del espectro radioeléctrico atribuidas por el Instituto a tal servicio;
3. La población las puede recibir de manera directa y gratuita utilizando los dispositivos idóneos para ello.

La primera y la tercera de las premisas se encuentran plenamente acreditadas en el procedimiento administrativo en que se actúa al existir constancia en autos del monitoreo del espectro radioeléctrico realizado, de las cuales se desprende que

efectivamente se estaban transmitiendo señales de audio, mismas que pueden ser recibidas de manera directa por la población con el simple hecho de contar con el medio idóneo, que en el presente caso lo constituye un radio receptor.

De igual forma, la primera y segunda de las premisas quedaron plenamente acreditadas durante el desarrollo de la diligencia de verificación, ya que derivado del monitoreo se detectó el uso de la frecuencia **96.1 MHz** a través de **(i)** un transmisor, sin marca ni modelo y sin número de serie, **(ii)** antena omnidireccional sin marca ni modelo y sin número de serie, con lo que se acredita la propagación de ondas y el uso de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico.

Ahora bien de la definición de servicio público de radiodifusión se desprenden los siguientes elementos:

- ✓ Son servicios de interés general.
- ✓ Generalmente son prestados por concesionarios.
- ✓ Son para el público en general.
- ✓ Tienen fines comerciales, públicos o sociales.
- ✓ Se prestan conforme a las leyes aplicables.

Del análisis de dichos elementos se desprende que en el presente asunto el **PRESUNTO RESPONSABLE** no acreditó tener el carácter de concesionario, además de que en los archivos del **IFT** no obra concesión o permiso otorgado para operar esa frecuencia en dicha localidad.

Adicionalmente la frecuencia utilizada para esa entidad no se encuentra registrada en la infraestructura de Estaciones de Radio de Frecuencia Modulada ("FM") publicada en la página Web del **Instituto**, circunstancia que por sí misma constituye un hecho notorio que pone de manifiesto que los servicios no se

prestaban conforme a la ley, no obstante que se encontraban a disposición del público en general por lo detectado en el monitoreo.

Ahora bien, otro elemento que resulta importante analizar es que con independencia de la finalidad de la estación de radiodifusión, para poder prestar dicho servicio se deben de cumplir con los requisitos previstos por la Ley, esto en virtud de que como se puede advertir de lo señalado por la norma, no existe la necesidad de acreditar un uso comercial, público o social.

Así las cosas, en el presente asunto durante la Visita de Inspección-Verificación se acreditó la prestación del servicio público de radiodifusión a través del uso de la frecuencia **96.1MHz** con los equipos instalados y en operación consistentes en: (i) un transmisor, sin marca ni modelo y sin número de serie y, (ii) una antena omnidireccional sin marca ni modelo y sin número de serie y el **PRESUNTO RESPONSABLE** no acreditó contar con concesión o permiso para la prestación del servicio público referido; por tanto, se considera que es responsable de la violación a lo establecido 66 en relación con el 75, y dicha conducta es sancionable en términos de la fracción I del inciso E) del artículo 298 de la **LFTyR**. Asimismo, se actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 305 de dicho ordenamiento y lo procedente es declarar la pérdida a favor de la Nación de los bienes empleados en la comisión de la infracción.

En efecto, el artículo 298, inciso E), fracción I de la **LFTyR**, establece lo siguiente:

"Artículo 298. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley y a las disposiciones que deriven de ella, se sancionarán por el Instituto de conformidad con lo siguiente:

(...)

E, Con multa por el equivalente de 6.01% hasta 10% de los ingresos de la persona infractora que:

(...)

- I. Preste servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin contar con concesión o autorización, o"

En consecuencia y considerando que el **PRESUNTO RESPONSABLE**, es responsable de la prestación del servicio de radiodifusión a través del uso de la frecuencia **96.1 MHZ**, sin contar con concesión, permiso o autorización correspondiente que lo habilite para tal fin, lo procedente es imponer la sanción que corresponda en términos del citado artículo 298 inciso E) fracción I de la **LFTyR** y conforme lo previsto por el artículo 305 del mismo ordenamiento procede declarar la pérdida de los equipos detectados durante la visita de inspección-verificación, consistentes en:

Equipo	Marca	Modelo	Número de Serie	Sello de aseguramiento
Transmisor armado	Sin marca	Sin modelo	Sin número de serie	0203-16
Antena omnidireccional	Sin marcar	Sin modelo	Sin número de serie	0204-16

Lo anterior, toda vez que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público de la Federación, el cual es un recurso limitado, que conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la **CPEUM**, corresponde al Estado a través del Instituto salvaguardar su uso, aprovechamiento y explotación en beneficio del interés público.

Sirven de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios judiciales:

"ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. FORMA PARTE DEL ESPACIO AÉREO, QUE CONSTITUYE UN BIEN NACIONAL DE USO COMÚN SUJETO AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, PARA CUYO APROVECHAMIENTO ESPECIAL SE REQUIERE CONCESIÓN, AUTORIZACIÓN O PERMISO. La Sección Primera, Apartado 1-5, del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, define a las ondas radioeléctricas u ondas hertzianas como las ondas electromagnéticas cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de los 3,000 gigahertz y que se propagan por el espacio sin guía artificial. Por su parte, el artículo 3o., fracción II, de la Ley Federal de Telecomunicaciones define al espectro radioeléctrico como el espacio que permite la propagación sin guía artificial de ondas electromagnéticas cuyas bandas de frecuencia se fijan convencionalmente por debajo de los 3,000 gigahertz. En ese tenor, si se relaciona el concepto de ondas radioeléctricas definido por el derecho internacional con el del espectro radioeléctrico que define la Ley Federal de Telecomunicaciones, se concluye

que este último forma parte del espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, sobre el que la Nación ejerce dominio directo en la extensión y términos que fije el derecho internacional conforme al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, el espectro radioeléctrico constituye un bien de uso común que, como tal, en términos de la Ley General de Bienes Nacionales, está sujeto al régimen de dominio público de la Federación, pudiendo hacer uso de él todos los habitantes de la República Mexicana con las restricciones establecidas en las leyes y reglamentos administrativos aplicables, pero para su aprovechamiento especial se requiere concesión, autorización o permiso otorgados conforme a las condiciones y requisitos legalmente establecidos, los que no crean derechos reales, pues sólo otorgan frente a la administración y sin perjuicio de terceros, el derecho al uso, aprovechamiento o explotación conforme a las leyes y al título correspondiente.

Época: Novena Época, Registro: 170757, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: P./J. 65/2007, Página: 987"

"ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. SU CONCEPTO Y DISTINCIÓN CON RESPECTO AL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO. El artículo 3, fracción II, de la Ley Federal de Telecomunicaciones define al espectro radioeléctrico como el espacio que permite la propagación, sin guía artificial de ondas electromagnéticas, cuyas bandas de frecuencia se fijan convencionalmente por debajo de los tres mil gigahertz. Así, las frecuencias se agrupan convencionalmente en bandas, de acuerdo a sus características, y el conjunto de éstas constituye el espectro radioeléctrico, el cual integra una parte del espectro electromagnético utilizado como medio de transmisión para distintos servicios de telecomunicaciones, y es un bien del dominio público respecto del cual no debe haber barreras ni exclusividad que impidan su funcionalidad y el beneficio colectivo. Cabe señalar que el espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado y las frecuencias que lo componen son las que están en el rango entre los tres hertz y los tres mil gigahertz y, en esa virtud, su explotación se realiza aprovechándolas directamente o concediendo el aprovechamiento mediante la asignación a través de concesiones.

Época: Décima Época, Registro: 2005184, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.4o.A.72 A-(10a.), Página: 1129"

En ese sentido, se concluye que el **PRESUNTO RESPONSABLE** se encontraba prestando servicios de radiodifusión a través del uso del espectro radioeléctrico en la frecuencia **96.1 MHz**, en el Municipio de Comonfort, Estado de Guanajuato, sin contar con la concesión, permiso o autorización respectiva, por lo que en tal

sentido es responsable de la violación al artículo 66 en relación con el 75 y lo procedente es imponer una multa en términos del artículo 298, inciso E) fracción I, todos de la LFTyR. De igual forma con dicha conducta se actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 305 del mismo ordenamiento y en consecuencia procede declarar la pérdida a favor de la Nación de los bienes y equipos empleados en la comisión de dicha infracción.

SÉPTIMO. DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA SANCIÓN.

El prestar servicios de radiodifusión sin contar con la concesión respectiva y en consecuencia incumplir con el artículo 66 de la LFTyR, resulta sancionable en términos de lo previsto en el artículo 298, inciso E), fracción I de la citada Ley, que a la letra señala:

"Artículo 298. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley y a las disposiciones que deriven de ella, se sancionarán por el Instituto de conformidad con lo siguiente:

...

E) Con multa por el equivalente de 6.01% hasta 10% de los ingresos de la persona infractora que:

I. Preste servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin contar con concesión o autorización..."

Ahora bien, para estar en condiciones de establecer la multa respectiva en términos de lo dispuesto por el artículo antes transcrito, es importante hacer notar que esta autoridad resolutora carece de los elementos mínimos necesarios para su cuantificación, en razón de que de las constancias que integran el expediente en que se actúa no es posible determinar la identidad de la persona infractora, y consecuentemente el monto de sus ingresos acumulados.

Lo anterior, toda vez que durante la visita de verificación no fue posible identificar al responsable de la estación y la persona que atendió la misma señaló que *no sabía que había una radio aquí*, por lo que se estima que en el expediente en que se actúa no existen elementos de prueba que permitan acreditar de manera contundente la identidad del presunto infractor ya sea la propiedad o posesión de dichas instalaciones, no obstante los esfuerzos realizados por esta autoridad para obtener dicha información y en consecuencia se carece de los elementos para la individualización de la multa a que se refieren los artículos 298 y 299 antes citados, por lo que esta autoridad resolutora considera inviable imponer una sanción económica en el presente asunto.

A este respecto, es oportuno mencionar que la **DGV**, con la finalidad de allegarse de elementos que permitieran la plena identificación del presunto infractor, mediante oficios de dieciséis de junio de dos mil dieciséis solicitó al Registro Público de la Propiedad y a la Dirección del Catastro e Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria, ambos del Municipio de Comonfort, en el Estado de Guanajuato, proporcionar mediante constancias debidamente certificadas, el nombre de la persona física o moral propietaria y/o poseedora del inmueble ubicado en **Calle** [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Municipio de Comonfort, Estado de Guanajuato.

En respuesta a dicha solicitud, el seis de julio de dos mil dieciséis, se recibió un sobre conteniendo un "**Certificado de Inscripción o no Inscripción**" por parte del Registro Público de la Propiedad del Municipio de Comonfort en el Estado de Guanajuato, donde señala que habiéndose realizado una búsqueda en los archivos correspondientes con los datos proporcionados, no se localizó información alguna dentro de sus registros, sin embargo localizó una inscripción señalado textualmente: "**SE ENCONTRÓ UNA INSCRIPCIÓN BAJO EL FOLIO R09* 1001 QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:** .. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]
siendo el propietario de la finca el C. [REDACTED].

Ahora bien, en la certificación anexa a dicho oficio aparece una inscripción de propiedad a nombre de C. [REDACTED], y en ese sentido el procedimiento de mérito se inició también en contra de la referida persona a efecto de que si la misma era propietaria del inmueble en donde se localizaron los equipos de radiodifusión, compareciera al presente procedimiento a deducir sus derechos.

Del análisis de las constancias que obran en el expediente en que se actúa se desprende que no compareció persona alguna a defender sus intereses en el presente asunto.

No obstante lo anterior, no pasa desapercibido que el Registro Público de la Propiedad del Municipio de Comonfort en el Estado de Guanajuato, remitió información relacionada con un predio de cuya descripción se advierte que se trata de un inmueble diverso a aquél en donde se llevó a cabo la visita de verificación que dio origen al presente expediente, por lo que en tal sentido este órgano colegiado considera que no resulta procedente atribuirle responsabilidad administrativa alguna a la persona de referencia.

Lo anterior, se corrobora con el oficio No. **DCIP/262/2016**, remitido por la Dirección del Catastro e Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria, en el Municipio de Comonfort, Estado de Guanajuato, donde señala que se realizó una búsqueda exhaustiva en los libros de esa oficina no habiendo encontrado registro alguno "del domicilio de calle [REDACTED]"

No es obstáculo para lo anterior el hecho de que se hubieran remitido diversas constancias relacionadas con un folio de inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Municipio de Comonfort, ya que con las mismas no es posible

acreditar que si se trata de las relacionadas con el predio en el que fueron localizados los equipos o de uno diverso,

De lo anterior se advierte que no fue posible identificar al propietario del inmueble donde se aseguraron los equipos de radiodifusión relacionados con el acta de mérito y consecuentemente los ingresos del mismo, es decir no se cuenta con los elementos suficientes para individualizar la sanción prevista en este artículo.

Por lo anterior, en virtud de que no fue posible identificar al **PRESUNTO RESPONSABLE** no obstante los esfuerzos realizados para obtener dicha información, esta autoridad resolutora considera inviable imponer una sanción económica en el presente asunto ya que no se cuenta con los elementos para individualizar la misma, en términos de los artículos 298 y 299 de la **LFTyR**.

Aunado a lo anterior, resulta importante señalar que en diversas ocasiones tanto el Servicio de Administración Tributaria como las Secretarías de Finanzas y Administración de algunas Entidades del país, han informado a este Instituto la imposibilidad de hacer efectivo el cobro de aquellas multas en las que no se especifique el nombre de la persona física o la denominación o razón social de aquella a la que haya sido impuesta la referida sanción, haciendo la precisión de que las resoluciones que se emitan en las que se imponga una multa deberán contener los datos que permitan identificar plenamente al sancionado, tales como nombre o razón social, domicilio completo e importe a recuperar y concepto, requisitos que en su integridad resultan indispensables para que dichos órganos tributarios estén en aptitud de instaurar el procedimiento administrativo de ejecución.

Lo anterior es consistente con lo previsto en numeral 2.1.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, que entre otros requisitos establece los

relativos al nombre, domicilio completo y Registro Federal de Contribuyentes del infractor, a quien se le ha impuesto la sanción que por su conducto se pretende ejecutar.

En otro orden de ideas, atendiendo a la naturaleza de la infracción, lo procedente es que en la presente resolución este Instituto declare la pérdida a favor de la Nación de los bienes, equipos e instalaciones empleados en la comisión de la infracción, con lo cual se busca inhibir las conductas que tiendan a hacer uso del espectro radioeléctrico sin que exista un título o documento habilitante para ello. Asimismo, cabe indicar que, a diferencia de los artículos 298 y 299, la sanción prevista en el artículo 305 de la LFTyR no necesita de elementos para su individualización, pues ésta procede como consecuencia inmediata de la actualización de la hipótesis normativa prevista en ese artículo.

Por ello, en virtud de que el propietario, responsable, ocupante y/o encargado del inmueble, estación, estudios y/o planta transmisora donde se detectaron las instalaciones de la estación de radiodifusión, operando la frecuencia 96.1 MHz, ubicado en Calle [REDACTED] [REDACTED] Municipio de Comonfort, Estado de Guanajuato no cuenta con concesión, permiso o autorización para usar legalmente la frecuencia 96.1 MHz, y que quedó plenamente acreditado que se encontraba prestando un servicio de radiodifusión, se actualiza la hipótesis normativa prevista expresamente en el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

En efecto, el artículo 305 de la LFTyR, expresamente señala:

"Artículo 305. Las personas que presten servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión, sin contar con concesión o autorización, o que por cualquier otro medio invadan u obstuyan las vías generales de comunicación, perderán en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones."

En tal virtud, procede declarar la pérdida en beneficio de la Nación de los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dicha infracción por el propietario y/o poseedor, y/o responsable, y/o encargado de las instalaciones y equipos de radiodifusión operando la frecuencia 96.5 MHz, consistentes en:

Equipo	Marca	Modelo	Número de Serie	Sello de aseguramiento
Transmisor Armado	Sin marca	Sin modelo	Sin número de serie	0203-16
Antena omnidireccional	Sin marcar	Sin modelo	Sin número de serie	0204-16

Los cuales están debidamente identificados en el acta de verificación ordinaria número IFT/UC/DGV/194/2016, habiendo designando como interventor especial (depositario) a Raúl Leonel Mulhla Arzaluz, por lo que se le deberá solicitar que en su carácter de interventor especial (depositario) ponga a disposición los equipos asegurados.

En consecuencia, con base en los resultados y consideraciones anteriores, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones:

RESUELVE

PRIMERO. El propietario y/o poseedor y/o responsable y/o encargado del inmueble y/o de las instalaciones y equipos de radiodifusión con los cuales se operaba en la frecuencia 96.1 MHz, localizados en el domicilio ubicado en: calle [REDACTED], Municipio de Comonfort, en el Estado de Guanajuato, (identificado para efectos de la presente resolución como el PRESUNTO RESPONSABLE) infringió lo dispuesto en el artículo 66 en relación con el artículo 75, ambos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al haberse detectado que se encontraba prestando un servicio de radiodifusión a través de la frecuencia 96.1 MHz sin contar con concesión, permiso

o autorización otorgado por la autoridad competente, tal como quedó debidamente acreditado, no obstante lo anterior no se individualiza sanción alguna a este respecto, atendiendo a las consideraciones señaladas en el Considerando Séptimo de esta Resolución.

SEGUNDO. De conformidad con lo señalado en las Consideraciones Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima de la presente Resolución, el **PRESUNTO RESPONSABLE** se encontraba prestando servicios de radiodifusión en la frecuencia **96.1 MHz** y en consecuencia, con fundamento en el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se declara la pérdida en beneficio de la Nación de los equipos empleados en la comisión de dicha infracción consistentes en:

Equipo	Marca	Modelo	Número de Serie	Sello de aseguramiento
Transmisor armado	Sin marca	Sin modelo	Sin número de serie	0203-16
Antena omnidireccional	Sin marcar	Sin modelo	Sin número de serie	0204-16

TERCERO. Se instruye a la Unidad de Cumplimiento, para que a través de la Dirección General de Verificación, informe al interventor especial (depositario) la revocación de su nombramiento y en consecuencia ponga a disposición los bienes que pasan a poder de la Nación, previa verificación de que los sellos de aseguramiento no han sido violados y previamente al inventario pormenorizado de los citados bienes.

CUARTO. Con fundamento en el artículo 35, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se ordena que la presente Resolución se notifique al **PRESUNTO RESPONSABLE** en el domicilio precisado en el proemio de la presente Resolución.

QUINTO. En términos del artículo 3, fracción XIV de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, se informa al **PRESUNTO RESPONSABLE** que podrá consultar el expediente en que se actúa en las oficinas de la Unidad de Cumplimiento de este Instituto Federal de Telecomunicaciones, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur número 838, Cuarto Piso, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, Código Postal 03100, (edificio alterno a la sede de este Instituto), dentro del siguiente horario: de lunes a jueves de las 9:00 a las 18:30 horas y los viernes de 9:00 a 15:00 horas.

SEXTO. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 3, fracción XV y 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se hace del conocimiento del **PRESUNTO RESPONSABLE**, que la presente Resolución constituye un acto administrativo definitivo y por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 312 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, podrá ser impugnada mediante juicio de amparo indirecto ante los juzgados de distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación de la presente resolución, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SÉPTIMO. Una vez que la presente resolución haya quedado firme, con fundamento en el artículo 177 fracción XIX de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en relación con el artículo 36 fracción I del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, inscribese la misma en el Registro Público de Concesiones, para todos los efectos a que haya lugar.

OCTAVO. En su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

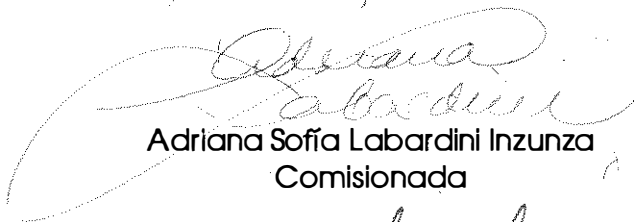
Así lo resolvió el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con fundamento en los artículos señalados en los Considerativos Primero y Segundo de la presente Resolución.



Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar
Comisionado Presidente



Ernesto Estrada González
Comisionado



Adriana Sofía Labardini Inzunza
Comisionada



María Elena Estavillo Flores
Comisionada



Mario Germán Fromow Rangel
Comisionado



Adolfo Cuevas Teja
Comisionado



Javier Juárez Mojica
Comisionado

La presente Resolución fue aprobada por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones en su III Sesión Ordinaria celebrada el 25 de enero de 2017, por unanimidad de votos de los Comisionados Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, Ernesto Estrada González, Adriana Sofía Labardini Inzunza, María Elena Estavillo Flores, Mario Germán Fromow Rangel, Adolfo Cuevas Teja y Javier Juárez Mojica; con fundamento en los párrafos vigésimo, fracciones I y III; y vigésimo primero, del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 7, 16 y 45 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como en los artículos 1, 7, 8 y 12 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante Acuerdo P/IFT/250117/18.